

SEBASTIÁN ROYO

Por encima de la seguridad y de la guerra de Irak, la evolución de la economía sigue siendo la gran preocupación de los votantes estadounidenses. El autor analiza las propuestas económicas de los candidatos y profundiza especialmente en la del aspirante



¿El regreso del 'Rubinomics'?

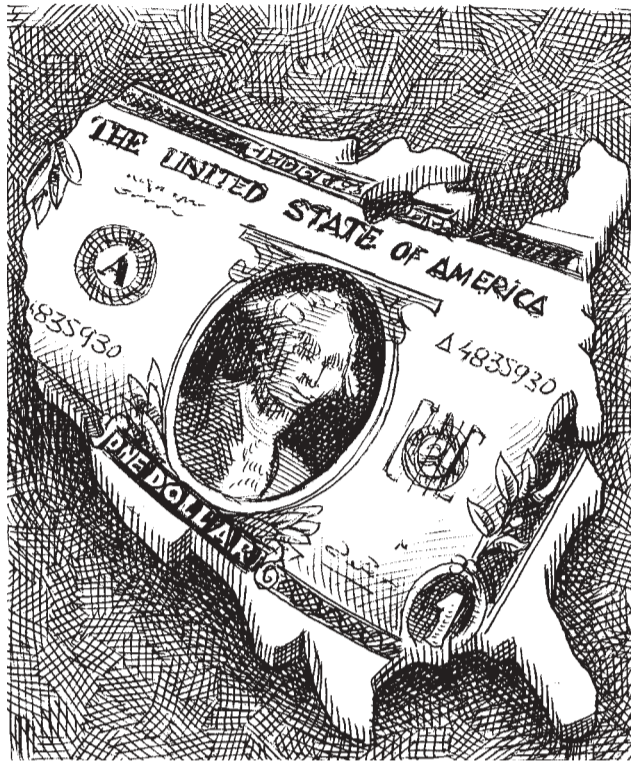
De acuerdo con las últimas encuestas la economía sigue siendo la preocupación principal de los ciudadanos norteamericanos, por encima de la seguridad y de la guerra en Irak. Un 21% de posibles votantes tiene miedo de perder su empleo en los próximos meses, y la proporción es incluso más alta (un 25%) entre los que ganan más de 75.000 dólares al año. Pese a que el desempleo se ha reducido a un 5,5% (desde un 6,3% en junio de 2003), durante los últimos cuatro años más de 2,3 millones de trabajadores han perdido su empleo, y la tasa de desempleo sería más alta si no fuese por los 1,6 millones de personas que han abandonado el mercado de trabajo en el último año. De hecho el presidente Bush se va a convertir en el primer presidente de las últimas décadas que va culminar su mandato con una pérdida neta de puestos de trabajo.

Además, las desigualdades están creciendo. De acuerdo con los datos de la Oficina del censo un quinto de las familias EE UU ha ganado casi la mitad de los ingresos del país en 2002. En el contexto de una campaña electoral muy reñida, la debilidad de la recuperación económica esta proporcionando un flanco de ataque que el senador Kerry esta tratando de explotar para reducir la brecha que se ha abierto en las encuestas tras la

Convención Republicana del pasado mes de agosto.

En contra de los argumentos de Bush, que defiende que la crisis económica ha sido el resultado de una "tormenta perfecta": la recesión que heredaron de Clinton, las guerras, y el ataque terrorista del 11-S de 2001, Kerry critica incansablemente las políticas económicas de Bush y en particular sus bajadas de impuestos, que han llevado a una explosión casi sin precedentes del déficit fiscal (422.000 millones de dólares este año, o un 3,6% del PIB). Kerry recuerda constantemente a los votantes el contraste con la situación económica de los noventa y se ha rodeado de asesores que trabajaron con Clinton durante esos años, incluyendo a Robert Rubin, ex secretario del Tesoro, Gene Sperling y Roger Altman.

Durante los noventa Rubin y su equipo fueron los principales defensores de la política de reducir el masivo déficit fiscal que heredaron de Reagan y Bush I. Como Director del Consejo Económico Nacional y más tarde como secretario del Tesoro, Rubin desarrolló unas políticas económicas que han dado lugar a lo que se ha denominado *Rubinomics*, basadas en el aumento del valor de las acciones, propiedades y otros activos; la disminución del desempleo; los incrementos de productividad; la defensa de un dólar fuerte; la apertura de mercados y promoción de arance-



ANGEL NAVAS

les bajos, y la intervención decidida en apoyo de economías emergentes en crisis.

El pilar fundamental de estas políticas era conseguir el superávit presupuestario, que según muchos analistas fue la clave del crecimiento económico de los noventa (otros economistas como el premio Nobel Stiglitz atribuyen también parte del crédito a la desregulación del sector financiero que facilitó la explosión de crédito y las inversiones).

La reducción del déficit tuvo dos efectos fundamentales: por un lado facilitó la bajada de los intereses, y por otro contribuyó a aumentar la confianza de los consumidores y los empresarios, que invirtieron mucho más. Estas políticas resultaron en unos niveles de prosperidad, creci-

Bush se va a convertir en el primer presidente de EE UU de las últimas décadas que va culminar su mandato con una pérdida neta de puestos de trabajo

miento, productividad, y mejoras de renta generalizadas casi sin precedentes.

Kerry esta utilizando estas políticas como modelo. Sus propuestas están articuladas en torno a dos ejes. Primero, la reducción del déficit, con el compromiso de recortarlo a la mitad en cuatro años, subiendo los impuestos a aquellos que ganan más de 200.000 dólares al año para pagar gastos adicionales en sanidad y educación, y vinculando cualquier aumento de gastos a nuevos ingresos.

En segundo lugar, Kerry ha propuesto la reforma del impuesto de sociedades para promover la inversión y penalizar alas empresas que opten por la deslocalización. Su plan propone la eliminación de beneficios impositivos a compañías que obtengan beneficios fuera del país (estimados en 12.000 millones de dólares al año) y una *vacación* de una año, durante el cual tendrían una tasa impositiva del 10%, para fomentar la repatriación de beneficios que las empresas dejan fuera del país. Utilizaría estos ahorros e ingresos para reducir el tipo impositivo del 35% al 33,25% y para crear un nuevo crédito impositivo que compensaría a las empresas por los impuestos de contratar a nuevos empleados.

Estas propuestas han sido recibidas con escepticismo. Muchos economistas dudan que puedan disuadir a las empresas de aprovecharse de los menores costos de otros países, y de que sea posible reducir el déficit a la mitad en el 2009 aumentando el gasto en sanidad y educación.

Profesor de la Universidad de Suffolk, en Boston, y codirector del Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard

MANUEL GIMENO

El voto popular con las nuevas tecnologías

La noticia de que el Gobierno está sopesando la posibilidad de introducir medios telemáticos de votación en el futuro referéndum sobre la Constitución europea ha sembrado la algarabía entre los que apostamos por la introducción del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la vida cotidiana. Además, medidas de este tipo deben contribuir a aumentar la participación ciudadana, tan maltratada en las últimas elecciones europeas, ayudando a mejorar el déficit democrático.

Ahora bien, una reforma de esta profundidad precisa de modificaciones legales y de la implementación de medios tecnológicos seguros que avalen el éxito del sufragio. En lo que se refiere a este segundo asunto, me atrevería a asegurar que existen suficientes mecanismos para afrontar el reto con garantías,

amén de la necesidad de invertir en las infraestructuras precisas. De cualquier forma, el planteamiento conocido hasta ahora responde a dos opciones muy diferentes y de distinto calado.

Por un lado, se barajan posibilidades que, en puridad, no deberían considerarse como voto electrónico, sino como emisión electrónica del voto. Me refiero a las pantallas táctiles o a la urna electrónica. La eficacia de éstas se limita a agilizar el recuento y, desde luego, crea menos problemas jurídicos, que tendrían que ver sobre todo con los cambios en las funciones de las mesas electorales. Un paso más de tímido adolescente que de aventurero tipo Indiana Jones.

Quizá, si se quiere de verdad abordar el reto del voto electrónico, convenga echar una mirada a otros medios como son el voto a través de

Internet o mediante SMS. Si bien este último está tocado con el don de la universalidad, baste comprobar para ello la tasa de penetración de la telefonía móvil en nuestro país, y el uso de SMS como mecanismo de voto está contrastado en consultas populares de diverso pelaje, mucho me temo que la apuesta más seria deba ser la utilización del voto electrónico mediante el uso de firma electrónica acompañada de su correspondiente certificado. El documento soportado por esta firma tiene asegurada de partida la equiparación entre el voto en papel y el electrónico, gracias al valor que la ley en vigor otorga a la firma electrónica, y reúne los atributos para ser considerado documento público o privado, según sea el caso y, de cualquier forma, oficial. Por otro lado, el uso de *passwords* parece remitir a técnicas del

pasado que claramente van a entrar en desuso en un futuro próximo.

Hablando de universalidad, el foco no hay que ponerlo en encontrar la fórmula que permita que todo el mundo vote electrónicamente, eso no va a pasar con ninguna de las existentes y el hecho de acudir al colegio electoral a votar debe seguir teniendo un profundo significado cívico. Hay que encontrar la mejor fórmula, no necesariamente la que llegue al mayor número de ciudadanos. Es mucho lo que hay en juego para caer en demagogia.

Es el momento de lamentarnos por el retraso que ha sufrido el lanzamiento del DNI electrónico, que permitiría, entre otras cosas, el reconocimiento automático de su poseedor, del votante. Gran ocasión tiene el cada vez menos nuevo Gobierno para apuntalar un proyecto

que el sector industrial involucrado y una cierta parte de la ciudadanía esperan con impaciencia y que supondrá, sin lugar a dudas, un fuerte impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

No deja de ser cierto que el reto del voto basado en firma electrónica no está exento del cumplimiento de una serie de requisitos informáticos (las máquinas donde se alojen los votos y su seguridad, informática y física), técnicos (la inclusión en el certificado del atributo de empadronamiento, si bien para el referéndum en cuestión no tiene importancia, o la decisión sobre la utilización de cualquier certificado o de uno especialmente diseñado para la votación) y jurídicos (por ejemplo, quizá se debiera crear un organismo que supliera o completara las funciones de las juntas y colegios elec-

torales y garantizase el resultado, y fuera necesaria la figura de un auditor externo del proceso). Porque tomar esta decisión se convierte automáticamente en un reto de primera magnitud. La no trazabilidad del voto (respeto al derecho de confidencialidad) y, a la vez, su verificabilidad (el voto debe ser único y correctamente emitido) son asimismo asuntos de vital importancia para el éxito de la experiencia.

Marzo de 2005 está ahí mismo, así que trabajo tienen los encargados de llevar adelante el proyecto. Apasionante trabajo, en cualquier caso, en un asunto tan importante para todos y que debería suponer un impulso definitivo al liderazgo tecnológico de la industria española del sector.

Director general de la Fundación Auna